

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia desde su publicación oficialmente en ellas y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos. Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero. Colón, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA.

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

El Sr. Marqués de San Carlos y su Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud. Y, al objeto de dar a conocer a los señores Ministros de la Gobernación, la continuación de la

TÍTULO III.

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las atribuciones de los Ayuntamientos.

Art. 71. Los Ayuntamientos son corporaciones económico-administrativas, y solo pueden ejercer aquellas funciones que por las leyes están cometidas.

Son tratamiento es el impersonal, y no se atribuyen a los Ayuntamientos la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, los que el Gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos con arreglo al núm. 1.º del art. 84 de la Constitución, y en particular cuando tenga relación con los objetos siguientes: a) Establecimiento y erección de servicios municipales referentes al arreglo y estado de la vía pública, comodidad e higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales, y seguridad de las personas y propiedades, a saber:

- 1.º Apertura y alineación de calles y plazas, y de toda clase de vías de comunicación.
- 2.º Empedrado, alumbrado y alcantarillado.
- 3.º Surtido de aguas.

(Véase el número 57.)

4.º Paseos y arbolados.

5.º Establecimientos balnearios, lavaderos, casas de mercado y mataderos.

6.º Ferias y mercados.

7.º Instituciones de instrucción y servicios sanitarios.

8.º Edificios municipales, y en general todo género de obras públicas necesarias para el cumplimiento de los servicios, con sujeción a la legislación especial de obras públicas.

9.º Vigilancia y guardería.

1.º Policía urbana y rural, sea cuanto tenga relación con el buen orden y vigilancia de los servicios municipales establecidos, cuidado de la vía pública en general, y limpieza, higiene y salubridad del pueblo.

2.º Administración municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos que de él dependen, y la determinación, repartimiento, recaudación, inversión, y cuenta de todos los arbitrios o impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales.

Es obligación de los Ayuntamientos la composición y conservación de los caminos vecinales. En cuanto a los caminos rurales, los Ayuntamientos obligarán a los interesados en los mismos a su reparación y conservación. Para lograr tan útiles objetos acordarán los medios en junta de asociados para los vecinales, y en junta de interesados para los rurales. Los Gobernadores velarán por el cumplimiento de esta parte tan interesante de la Administración, en virtud de las facultades que les confiere la ley Provincial.

Art. 73. Es obligación de los Ayuntamientos procurar, por sí o con los asociados, en los términos que mas adelante se expresarán, el exacto cumplimiento, con arreglo a los recursos y necesidades

del pueblo, de los fines y servicios que, según la presente ley, están cometidos a su acción y vigilancia, y en particular de los siguientes:

- 1.º Conservación y arreglo de la vía pública.
- 2.º Policía urbana y rural.
- 3.º Policía de seguridad.
- 4.º Instrucción primaria.
- 5.º Administración, custodia y conservación de todas las fincas, bienes y derechos del pueblo.
- 6.º Instituciones de Beneficencia.

Las atribuciones de los Ayuntamientos en el ramo de Beneficencia serán y se entenderán siempre sin perjuicio de la alta inspección que al Gobierno confiere la legislación vigente sobre Beneficencia general y particular.

En los asuntos que no sean de su exclusiva competencia están igualmente obligados a auxiliar la acción de las Autoridades generales y locales para el cumplimiento de aquella parte de las leyes que se refiera a los habitantes del término municipal o deba cumplirse dentro del mismo, a cuyo efecto procederán en conformidad a lo que determinen las mismas leyes y los reglamentos dictados para su ejecución.

Art. 74. Para el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, corresponden a estos muy especialmente las atribuciones siguientes:

- 1.º Formación de las Ordenanzas municipales de policía urbana y rural.
- 2.º Nombramiento de sus empleados y agentes en todos los ramos.
- Los agentes de vigilancia municipal que usen armas dependerán exclusivamente del Alcalde en su nombramiento y separación.
- 3.º Establecimiento de prestaciones personales.
- 4.º Asociación con otros Ayuntamientos.

Art. 75. Es atribución de los Ayuntamientos arreglar para cada

año el modo de división, aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales del pueblo con sujeción a las siguientes reglas:

1.º Cuando los bienes comunales no se presten a ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los vecinos del pueblo, el distrito y aprovechamiento será adjudicado en pública licitación entre los mismos vecinos exclusivamente, previas las tasaciones necesarias, y la división en lotes si a ello hubiere lugar.

2.º Si los bienes fueren susceptibles de utilización general, el Ayuntamiento verificará la distribución de los productos entre todos los vecinos, formando al efecto divisiones o lotes, que adjudicará a cada uno con arreglo a cualquiera de las tres bases siguientes:

- 1.º Por familias o vecinos.
- 2.º Por personas o habitantes.
- 3.º Por la cuota de repartimiento, si lo hubiere.

3.º La distribución por vecinos se hará con estricta igualdad entre cada uno de ellos, sea cual fuere el número de individuos de que conste su familia, o que vivan en su compañía, y bajo su dependencia. La distribución por personas se hará adjudicando a cada vecino la parte que le corresponda, en proporción al número de habitantes residentes, de que conste su casa o familia.

La distribución por la cuota de repartimiento se verificará entre los vecinos sujetos, a su pago, adjudicando a cada uno la parte que en proporción a la cuota repartida le corresponda. En este caso, se adjudicará a los vecinos pobres exceptuados del pago una porción que no exceda de la que corresponda al contribuyente por cuota mas baja.

4.º En casos extraordinarios, y cuando las atenciones del pueblo así lo exijan, puede el Ayuntamiento acordar la subasta entre vecinos de los aprovechamientos

omunales propiamente dichos, ó fijar el precio que cada uno ha de satisfacer por el lote que le haya sido adjudicado.

En todo lo referente al régimen, aprovechamiento y conservación de los montes municipales, regirán la ley de 24 de Mayo de 1863 y el reglamento de 17 de igual mes de 1865.

Art. 76. Las ordenanzas municipales de policía urbana y rural que los Ayuntamientos acuerden para el régimen de sus respectivos distritos no serán ejecutivas sin la aprobación del Gobernador, de acuerdo con la Diputación provincial.

En caso de discordia, si el Ayuntamiento insiste en su acuerdo, la aprobación en los puntos a que aquélla se refiera corresponderá al Gobierno, previa consulta al Consejo de Estado.

Ni en ellas ni en los reglamentos y disposiciones que los Ayuntamientos formaren para su ejecución, se contravendrá a las leyes generales del país.

Art. 77. Las penas que, por infracción de las Ordenanzas y reglamentos, impongan los Ayuntamientos, sólo pueden ser multas que no excedan de 50 pesetas en las capitales de provincia, 25 en las de partido y pueblos de 4.000 habitantes, y 15 en los restantes, con el resarcimiento del daño causado, indemnización de gastos, y arresto de un día por duro en caso de insolvencia.

Para la exacción de estas multas se procederá en conformidad a lo dispuesto en los artículos 185, reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, 186 y 188. El Juez municipal desempeñará las funciones que en el art. 188 se encomiendan al de primera instancia.

Contra la imposición subnativa puede el multado reclamar, conforme al art. 187.

Art. 78. Es atribución exclusiva de los Ayuntamientos el nombramiento y separación de todos los empleados y dependientes pagados de los fondos municipales, y que sean necesarios para la realización de los servicios que están a su cargo, con la excepción establecida en el párrafo 4.º del artículo 74.

Los funcionarios destinados a servicios profesionales tendrán la capacidad y condiciones que en las leyes relativas a aquellos se determinen.

Art. 79. La prestación personal se concederá como auxilio para fomentar las obras públicas municipales de la especie: los Ayuntamientos tienen facultad para imponerla a todos los habitantes mayores de 16 y menores de 50 años, exceptuando los acedidos en los establecimientos de caridad, los militares en activo

servicio y los imposibilitados para el trabajo.

El número de días no excederá de 20 al año ni de 10 consecutivos, siendo retribible cada uno por el valor que tengan los jornales en cada localidad.

Fuera de los casos de obras públicas que en este artículo se expresan, no podrá exigirse prestación ni servicio personal de ninguna clase, incurriendo en responsabilidad el Alcalde o Teniente que así lo hiciera.

Art. 80. Los Ayuntamientos pueden formar entre sí y con los inmediatos asociaciones y comunidades para la construcción y conservación de caminos, guardería rural, aprovechamientos vecinales y otros objetos de su exclusivo interés. Estas comunidades se regirán por una Junta compuesta de un Delegado por cada Ayuntamiento, presidida por un Vocal que la junta elija.

La Junta formará las cuentas y presupuestos, que serán sometidos a las municipales de cada pueblo, y en defecto de aprobación de todas ó de alguna, al Gobernador, oyendo necesariamente a la Comisión provincial.

Art. 81. El Gobierno de S. M. cuidará de fomentar y proteger por medio de sus Delegados las asociaciones y comunidades de Ayuntamientos para fines de seguridad, instrucción, asistencia, policía, construcción y conservación de caminos, aprovechamientos vecinales u otros servicios de índole análoga, sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta hoy. Estas comunidades serán siempre voluntarias y estarán regidas por Juntas de Delegados de los Ayuntamientos, que celebrarán alternativamente sus reuniones en las respectivas cabezas de los distritos municipales asociados.

Cuando se produzcan reclamaciones sobre la manera como actualmente son administradas las antiguas comunidades de tierra, el Gobierno, oyendo al Consejo de Estado, podrá someter dichas comunidades a lo dispuesto en el párrafo anterior, salvas las cuestiones relativas a los derechos de propiedad hasta hoy adquiridos, que quedan reservadas a los Tribunales de justicia.

Art. 82. Los Ayuntamientos pueden representar acerca de los negocios de su competencia a la Diputación provincial, al Gobernador, al Gobierno y a las Cortes.

Fuera del caso en que representen en queja del Alcalde del Gobernador ó de la Diputación, habrán de hacerlo por conducto del primero, y del segundo además cuando se dirijan al Gobierno.

Si en el término de ocho días no dieren curso esas Autoridades a las representaciones de los

Ayuntamientos podrán estos repetirlas en queja directamente a los poderes públicos.

Art. 83. Todos los acuerdos de los Ayuntamientos en asuntos de su competencia son inmediatamente ejecutivos, salvo los recursos que determinan las leyes.

Art. 84. Necesitan la aprobación del Gobernador, oída la Comisión provincial, para ser ejecutivos los acuerdos que se refieren a lo siguiente:

1.ª Reforma y supresión de establecimientos municipales de beneficencia é instrucción.

2.ª Podas y cortas en los montes municipales con sujeción a la ley y reglamento del ramo.

Art. 85. Las enajenaciones y permutas de los bienes municipales se acomodarán a las reglas siguientes:

1.ª Los terrenos sobrantes de la vía pública y concedidos al dominio particular, y los efectos inútiles, pueden ser vendidos exclusivamente por el Ayuntamiento.

2.ª Los contratos relativos a los edificios municipales, inútiles para el servicio a que estaban destinados, y créditos particulares a favor del pueblo, necesitan la aprobación del Gobernador, oyendo a la Comisión provincial.

3.ª Es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe del Gobernador, oyendo a la Comisión provincial, para todos los contratos relativos a los demás bienes inmuebles del Municipio, derechos reales y títulos de la Denda pública.

Art. 86. Es necesaria la autorización de la Diputación provincial para entablar pleitos a nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes.

El acuerdo del Ayuntamiento ha de ser tomado en todo caso previo dictamen conforme de dos Letrados.

No se necesita autorización ni dictamen de Letrados para utilizar los interdictos de retener ó recobrar, y los de obra nueva ó vieja, ni para seguir los pleitos en que el Ayuntamiento fuese demandado.

Art. 87. Siempre que por cualquiera de los casos enumerados en los artículos anteriores sea preciso obtener la aprobación del Gobernador ó del Gobierno, el Alcalde cuidará de remitir los antecedentes dentro de un plazo que no exceda de ocho días, contados desde la fecha del acuerdo.

Art. 88. Los Ayuntamientos, en todos los asuntos que según esta ley no les competen exclusivamente, y en que obren por delegación, se acomodarán a lo mandado por las leyes y disposiciones del Gobierno que a ellos se refieran.

Art. 89. Los Jueces y Tri-

bunales no admitirán interdictos contra las providencias administrativas de los Ayuntamientos y Alcaldes en los asuntos de su competencia.

Los interesados pueden utilizar para su derecho los recursos establecidos en los artículos 171 y 177 de esta ley.

CAPITULO II

De la administración de los pueblos agregados a un término municipal.

Art. 90. Los pueblos que, formando con otros término municipal, tengan territorio propio, aguas, pastos, montes ó cualesquiera derechos que les sean peculiares, conservarán sobre ellos su administración particular.

Art. 91. Para dicha administración nombrarán una Junta, que se compondrá de un Presidente y de dos ó cuatro Vocales, elegidos directamente uno y otros por los vecinos del pueblo y de entre ellos mismos.

Serán cuatro los Vocales para los pueblos de 60 ó más vecinos, y dos cuando sea menor el vecindario.

Art. 92. La elección de Presidente y Vocales indicadas, se hará con arreglo a la ley electoral, pero en un solo día y sin que trascurran más de ocho días desde la posesión del Ayuntamiento del término, (el cual cuidará de la ejecución).

Art. 93. Elegidos los tres ó cinco individuos para la Junta, corresponderá el cargo de Presidente a quien haya obtenido mas votos, y si hubiera empate decidirá la suerte.

Art. 94. Serán tachas para la elección de individuos de la Junta, con relación al pueblo respectivo, las mismas que establece esta ley para los cargos municipales.

Art. 95. El Ayuntamiento del término respectivo inspeccionará la administración particular a que se refiere este capítulo, bien por su iniciativa, ó ya a solicitud de dos ó más vecinos del pueblo interesado.

Art. 96. La administración y la inspección expresadas, así como los deberes y las obligaciones de la Junta y de sus Vocales, se arreglarán a las prescripciones de la presente ley, en todo lo que no se halla determinado en este capítulo.

CAPITULO III

De las sesiones y del modo de funcionar los Ayuntamientos.

Art. 97. Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas. Sólo serán secretas cuando así lo acordaren la mayoría de los asistentes por ser los asuntos que en ellas hayan de tratarse relativos al orden público, régimen interior de la Corporación, ó por afe-

tar al d. c. de esta o de cualquier de sus miembros.

Las sesiones se celebrarán precisamente, pena de nulidad, en las Casas Consistoriales, salvo los casos de fuerza mayor.

Estarán constantemente anunciados en los sitios de costumbre los días y horas en que deban celebrarse las sesiones ordinarias.

Art. 98. Los Alcaldes, Tenientes y Regidores están obligados a concurrir puntualmente a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, no limpiándose la justa causa que acreditarán en su caso.

La falta de asistencia hace incurrir por cada vez en una multa con arreglo a la siguiente escala:

Pésetas:

En los pueblos de más de 30.000 habitantes. 5

Idem de más de 15.000 id. 4

Idem de más de 8.000 id. 2

En los demás. 1

Esta disposición es aplicable a los Vocales de la Junta municipal, pero las multas serán por cantidad cuádruple respecto a la primera, y doble de esta respecto a la segunda.

Art. 99. Los Alcaldes, Tenientes y Regidores tienen todos voz y voto en las sesiones y acuerdos del Ayuntamiento.

En señal de responsabilidad por los acuerdos que autorizan con su voto, sin que por ningún concepto les sea permitido abstenerse de emitirlo.

Art. 100. La presidencia del Ayuntamiento corresponde al Alcalde, en su defecto, presidirán los Tenientes, y a falta de todos el Regidor Decano y los demás en el orden que se determina en el art. 52.

El Gobernador preside sin voto cuando asiste a las sesiones del Ayuntamiento.

Art. 101. El Alcalde podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo juzgue oportuno, y debe hacerlo siempre que se lo prevenga el Gobernador, o lo reclame la tercera parte de los Concejales.

Art. 102. En toda convocatoria para sesión extraordinaria se expresarán los asuntos que hayan de tratarse en ella, y no podrá el Ayuntamiento ocuparse de ningún otro en la misma sesión.

Las convocatorias se harán con un día de anticipación por lo menos, a no ser en los casos de mayor urgencia, y quedarán sujetos los acuerdos a ratificación en la sesión inmediata.

Art. 103. Toda sesión con carácter de ordinaria, fuera de los días señalados, conforme al artículo 57 de esta ley, así como cualquiera extraordinaria no convocada por el Alcalde en la forma y con las circunstancias que previenen los artículos anteriores, o en

que se trate de un asunto no anunciado en la convocatoria, es nula y de ningún valor, y nulos también los acuerdos en ella tomados.

Art. 104. Para que haya sesión se requiere la presencia de la mayoría del total de Concejales que según esta ley deba tener el Ayuntamiento.

Si en la primera reunión no hubiera número suficiente para acordar, se hará nueva citación para dos días después, expresando la causa, y los que concurren pueden tomar acuerdo cualquiera que sea su número.

Art. 105. Todo asunto sobre que haya de resolver el Ayuntamiento será primero discutido y luego votado.

Se entiende acordado lo que votaren la mitad más uno de los Concejales presentes en sesión.

En caso de empate se repetirá la votación en la sesión próxima, o en la misma si el asunto tuviere el carácter de urgente a juicio de los asistentes; y si aquel se reprodujere, el voto del que presida será decisivo. Si el Gobernador de la provincia presidiera accidentalmente, decidirá el voto de aquel Concejale a quien, según esta ley, correspondiera la presidencia.

Art. 106. Las votaciones serán nominales, cuando no se trate de asuntos relativos a los mismos Concejales, o a personas de su familia dentro del cuarto grado, en cuyo caso serán secretas, debiendo salir de la sesión mientras se discute y vota el asunto el Concejale interesado.

Art. 107. De cada sesión se extenderá por el Secretario del Ayuntamiento un nota en que han de constar los nombres del Presidente y demás Concejales presentes, los asuntos que se tratan y lo resuelto sobre ellos, el resultado de las votaciones y la lista de las nominales cuando las hubiere.

Siempre constarán en el acta la opinión de las minorías y sus fundamentos.

El acta será firmada por los Concejales que concurren a la sesión; por los presentes cuando se dé cuenta de ella, y por el Secretario.

El acta de la sesión inaugural de cada Ayuntamiento será firmada por todos los que a ella concurren, expresando los que no saben firmar.

Art. 108. El libro de actas del Ayuntamiento es un instrumento público y solamente en el acuerdo que no conste explícita y terminantemente en el acta a que se refiere tendrá valor alguno.

Este libro estará extendido en papel de sello correspondiente, y todas sus hojas llevarán la rúbrica

del Alcalde y el sello del Ayuntamiento, así como el de cada uno de los Concejales.

Art. 109. A fin de cada trimestre en las capitales de provincia y de partido y pueblos que tengan más de 4.000 habitantes, y de cada trimestre en los demás, se formará por el Secretario un extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el mismo, y aprobado por la corporación, se remitirá al Gobernador de la provincia para su inserción en el Boletín oficial.

Art. 110. Las reglas anteriores se aplicarán a las actas y sesiones de la Junta municipal, se llevarán sus actas en libros separados de las del Ayuntamiento y con análogas formalidades, precauciones y requisitos, salvo lo en contrario dispuesto por esta ley.

Art. 111. Los trámites de instrucción y discusión no servirán nunca de excusa a los Ayuntamientos para dilatar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes les imponen.

(Se continuará.)

CUARTA SECCION.

INSTITUTO GEOGRAFICO

Y ESTADISTICO.

Trabajos estadísticos. — Provincia de Orense. — Circular.

En vista de las comunicaciones pasadas a esta Dependencia por algunos Sres. Jueces municipales y Alcaldes, pidiendo un suplemento de papeletas de las destinadas a las inscripciones del movimiento de población, por no tener bastante con las remitidas, para anotar todos los extractos correspondientes al año de 1876 que en sus respectivos libros constan, se recomienda a todos los Sres. Jueces y Alcaldes que no hayan recibido un número suficiente de las mencionadas papeletas, se sirvan formular con precisión y a la mayor brevedad, los pedidos de las que de cada clase calculen necesarias para cumplir el servicio.

Igualmente tiene que recomendar esta Dependencia a las referidas Autoridades tengan a bien devolver a la misma las papeletas que resulten sobrantes después de terminados todos los extractos.

Orense 25 de Octubre de 1877.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

ADMINISTRACION ECONOMICA

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Intereses de bonos.

De conformidad con lo dispuesto por la Dirección general del Tesoro público en orden circular de 16 del actual, esta Administración acordó satisfacer en los días que a continuación se expresan, las facturas resguardos de cupones de Bonos del Tesoro que se

detallan correspondientes al semestre vencido en 130 de Junio último.

Día 24.

NÚMERO de las facturas.	1.ª emisión	IMPORTE — Pesetas.
1.º		120
2.º		330
3.º		195
4.º		255

Día 25.

5.º		135
6.º		15
7.º		75
8.º		120
9.º		105

Orense 20 de Octubre de 1877.

—Angel Guerra.

Resultando vacantes, aunque

provistos interinamente, los estancos de tabaco dependientes de las Administraciones subalternas que a continuación se relacionan;

se hace saber a las personas que en conformidad con las instrucciones vigentes y decreto de 24 de

Setiembre de 1874 se considera con aptitud para obtener la propiedad de los referidos estancos,

que pueden desde luego entablar su acción por medio de solicitud en forma que presentarán en esta

Administración, acompañada de la copia de su licencia absoluta,

visada por el Comisario de guerra los que fueren licenciados del

Ejército y de la del último destino que hubieren servido, los que pertenecen a la carrera civil; pre-

cisamente dentro del improrogable término de 15 días a contar desde el en que tenga cabida la

inserción de este anuncio en el periódico oficial de la provincia.

Orense 25 de Octubre de 1877.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

El Jefe de los trabajos, Manuel Hermida.

nocimiento de los que se interesan en la adquisicion de dichos árboles.

Orense Octubre 20 de 1877—
El Alcalde, F. Segundo Puga.

Gudiña.

Por el término de ocho días, contados desde el en que tenga lugar la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, se hallarán al público en la Secretaría de este Ayuntamiento los repartimientos de consumos y sal, formados para el actual año económico, á fin de que los contribuyentes puedan enterarse de sus respectivas cuotas y presentar las reclamaciones que vieren convenirles; trascurrido que sea el término señalado, no serán admitidas.

Gudiña 18 de Octubre de 1877.
—El Alcalde, Francisco Fernandez.

Coles.

Hallándose como se halla terminado el repartimiento del cupo de sal que ha correspondido á este Ayuntamiento en el corriente año económico, permanecerá expuesto al público en la Secretaría del mismo, por término de ocho días y horas regulares de despacho, contados desde el en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, á fin de que los contenidos en él puedan hacer las reclamaciones de agravio que consideren procedentes; trascurrido dicho término sin verificarlo, no serán admitidas las que se produzcan, como estemporáneas.

Coles 22 de Octubre de 1877.
—El Teniente Alcalde, primer V., Alejandro Fernandez.

SESTA SECCION.

FISCALIA DE LA AUDIENCIA DE LA CORUÑA.

Circular.

El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me dice con fecha 10 del actual lo que sigue:

Ha llegado á noticia de este Ministerio que en algunos casos no se hace constar en los procesos como es debido el cumplimiento de la sentencia, ignorándose por consiguiente si los reos han cumplido ó no la condena; y siendo conveniente que los Tribunales de justicia á quienes incumbe juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, tenga noticia cierta de la eficacia de sus fallos y de que los culpables espian sus delitos en la forma que las leyes establecen, el Rey (q. D. g.) en vista del expediente instruido sobre el particular, ha tenido á bien dis-

poner se escite el reconocido celo de V. S. y de los Juzgados del distrito de esa Audiencia á fin de que en las causas y juicios de que conozcan se haga siempre constar el cumplimiento de las sentencias como se ordena en el título 7.º libro 2.º de la Ley provisional de Enjuiciamiento criminal; reclamando con insistencia si fuere preciso, de las autoridades gubernativas, los documentos y noticias oficiales que por razon de sus cargos están obligados á suministrar para que obren en las causas de su referencia con el objeto indicado. De Real orden lo digo á V. S. para los efectos oportunos.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y exacto cumplimiento.

Coruña 19 de Octubre de 1877.
—Alejandro Peray.—Sr. Promotor fiscal de....

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don José Vazquez Rodriguez, Escribano del Juzgado de primera instancia de Celanova.

Certifico: que en la demanda incidental de pobreza promovida por el Procurador D. Manuel Torrado á nombre de Santiago Fernandez Justo, vecino de Sabucedo de Montes, contra Pedro Carrera, Juan da Pena, Benito Rodriguez, Pedro da Rega, Ramon Fernandez, Pedro Vazquez, Juan Sousa, Isidro Fernandez, Juan Reza, Domingo Garcia, Manuel Perez, José Garcia, Maximino Garcia, José Justo, Ramon Fernandez, Josefa Fernandez, Dominga Fernandez, Manuel Vazquez, Andrés Vazquez, digo Reza, Alejo Ferro, Teresa Perez, Manuel Perez, Julian Doniz, Casimiro Fernandez, Ramon Carrera, Andrés Vazquez, Juan Manuel San Miguel, Bernardo Fernandez, Julian Atrio, José Garcia, Ramon Perez, Vicente Vazquez, Angel Doniz, Manuel da Pena, Manuel Justo, Carlos Gonzalez, Isidro Alvarez, Francisco Casas, D. Andrés Justo, Josefa Carrero, Santiago Fernandez, Justo Domingo Perez, Luis Rodriguez, Gabino Gonzalez, Antonio Alvarez, Antonio Vazquez, Juan Fernandez Alvite, Antonio Ferro, Máximo Garcia viado, Felipe Cid, Manuela Seara, Maximino Rodriguez, Juana Luisa y Santiago Sousa, Pedro Reza, Juan Sousa, Santiago Lamela, José y Domingo Fernandez, Manuel Fernandez, Josefa Rodriguez, Manuela Sousa, Gabriel Perez, José Reza, Manuel Lopez, José Vazquez, Manuel Pazos, Maria Carrera, Rita Perez, José Gulin, Ramon Perez, Tomasa Nieves, José Rodriguez y Ministerio fiscal; y seguida por to-

dos sus trámites, se dictó la siguiente sentencia:

En la villa de Celanova á 24 de Setiembre de 1877, el Sr. D. Venancio Meruendano y Mosquera, Juez de primera instancia de la misma y su partido, habiendo visto estas diligencias, y

Resultando: que el Procurador D. Manuel Torrado á nombre de Santiago Fernandez Justo, vecino de Sabucedo de Montes de la Alcaldia de Cartella, para poder litigar con Pedro Carrera, Juan da Pena, Benito Rodriguez y mas que refiere la demanda inicial sus convecinos, solicitó informacion de pobreza, exponiendo que el producto liquido de todos los bienes que cultivaba, no alcanzan ni con mucho al doble jornal de un bracero en esta cabeza de partido, que son dos pesetas, y que no ejercia otro oficio ni industria mas que la agricola.

Resultando: que admitida la demanda y conferido traslado á los demandados y Ministerio fiscal, se lo lo evacuó éste, por lo que acusada la rebeldia se recibió el asunto á prueba, durante cuyo término suministró la demandante la testifical conveniente sin que se hubiese dado alguna en contrario, y transcurrido y oído de nuevo al Ministerio fiscal, opina por que se acceda á la demanda.

Considerando: que de la prueba producida aparece justificado de una manera indudable, que los bienes del demandante no producen ni una peseta diaria que es la mitad del doble jornal de un bracero en esta localidad y que no ejerce otro oficio ni industria mas que el de labrador, careciendo de toda otra clase de rentas que no sean los frutos labrados en sus fincas.

Vistos los artículos 181 y 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Fallo: que debia declarar y declarar pobre en sentido legal al representado del Procurador Torrado Santiago Fernandez Justo para litigar con los demandados Pedro Carrera, Juan da Pena y consortes, mandando que mientras no mejore de fortuna se le ayude y defienda en tal concepto. Y por esta definitivamente juzgando en primera instancia, que se publique en el Boletín oficial de la provincia por la rebeldia de los demandados la pronuncia, manda y firma S. S., de que yo escribano doy fé.

—Venancio Meruendano.—José Vazquez Rodriguez.

Y para la insercion en el Boletín oficial, segun lo acordado, es pido el presente en Celanova á 15 de Octubre de 1877.—José Vazquez Rodriguez.

ANUNCIOS.

Obras de D. Eusebio Freixa y Rabaso, de que hay existencias para la venta.

«Prontuario de la Administración Municipal,» con modelos y formularios para todos los actos y servicios á que son llamados los Alcaldes, Ayuntamientos, sus Secretarjes, Juntas locales de enseñanza y Maestros de Instrucción primaria; segunda edición arreglada á las vigentes disposiciones; mejorada de la primera que se recomendó á los Ayuntamientos, con abono en sus presupuestos, por Real orden de 24 de Setiembre de 1886, consistente en mas de 140 expedientes completos, 1.700 formularios y un gran número de demostraciones aritméticas para facilitar los trabajos de presupuestos, balances, liquidaciones, repartos, y amillaramientos; una rescha de los servicios periódicos, expresiva de los días, semanas, quincenas, meses, trimestres, cuatrimestres, semestres, años, etc., en que han de practicarse, y páginas de la obra en que se encuentran los formularios, así como un índice alfabético muy circunstanciado de todas las materias contenidas en la misma.

«Leyes orgánicas municipal y provincial» de 20 de Agosto de 1870, con intercalacion en su texto de la de 16 de Diciembre de 1876, publicadas en cumplimiento de la ley y Real decreto de 2 de Octubre de 1877. Contiene extractos al margen de cada uno de sus artículos, é infinidad de citas importantes. Libro utilizable como apéndice al «Prontuario de la Administración municipal;» su precio 7 rs.

«Legislacion para todos.»—Apéndice á las obras tituladas: «Leyes orgánicas municipal y provincial y Prontuario de la Administración municipal.» Contiene la Instrucción vigente de Contabilidad de los Ayuntamientos, de 20 de Noviembre de 1845; las leyes, decretos, Instrucciones y reglamentos, etc., que se citan en dichas leyes; y ademas, relaciones con extension una, extractadas del monte otras y copiadas muchas, las leyes y otras disposiciones de «Policia Urbana» sobre construcciones, «Policia rural, Montes, Bando de caza, Instrucción primaria, Cementerios y Aguas;» su precio 10 rs.

«Guia de cultivos.» 7.ª edición; su precio 10 rs.

«Guia de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales;» obra utilísima con muchos formularios; su precio 8 rs.

«Guia de Elecciones;» su precio 2 rs.

«Auxiliar de Bufetes;» 2.ª edición hecha en 1874, su costo 4 rs.

«Guia de la contribucion de Inmuebles, cultivo y ganaderia.» con formularios utilísimos, tanto para el nombramiento de peritos, como para la redaccion de repartos, cartillas, amillaramientos, reclamaciones de agravio, expedientes que se incoan en los casos de pedriscos, inundaciones, etc., y ademas la legislacion del ramo en extracto.—Forma un libro de 224 páginas en 4.ª, su precio 12 rs.—Apéndice á la misma, con el novísimo Reglamento y sus modelos, 2 rs. Este se vende únicamente á los que hayan adquirido ó adquirieran la «Guia.» Ambos cuestan 14 rs.

«Rectificacion de los amillaramientos de la riqueza rústica, urbana y pecuaria;» consistente en el Reglamento de 19 de Setiembre de 1876 y sus modelos correspondientes, etc., etc. Forma un tomo en 4.ª de 110 páginas y cuesta 6 rs.

«Guia práctica de la contribucion industrial;» 4.ª edición; su precio 4 rs.

«Guia de apremios por deudas de contribuciones propios, arbitrios y postos;» 8 rs.

«Artículos de primera necesidad;» suministros, bagajes y alojamientos, 6 rs.

«Guia de consumos;» 7.ª edición, publicada en Agosto de 1877, su precio 8 rs.

«El Ángel de una familia;» comedia dramática en cuatro actos, y en verso, 8 rs.

«Los que deseen se les remita algunas de varias de las obras anunciadas, deberán acompañar su importe al hacer el pedido, ya en letra de facil cobro, ya en libranzas del giro mútuo ó sellos de franqueo, con 2 rs. mas de su valor para certificar los envios.

La correspondencia se dirigirá á D. Eusebio Freixa, Cava Baja, 22, principal, Madrid.

Advertencia. Tanto en Madrid como en provincias hay ejemplares de venta en las principales librerías, sin aumento de precio.